**ENFOQUE SOCIO—JURIDICO
DE LA EXTRADICION**

**LUIS C. GOMEZ N.
ALEJANDRO LLANOS R.
JAVIER SANCHEZ U.**

**Ensayo Presentado como Requisito para optar el
Título de: ABOGADO**

**UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
FACULTAD DE DERECHO
MODULO POLITICO
BARRANQUILLA
1996**

AGRADECIMIENTOS

A mi Madre IVETH, quien me apoyo moral y economicamente, lo mismo que a HILARIO, para conseguir tan anhelado titulo.

A mi Hermano GABRIEL, quien me brindo siempre su apoyo a mi Novia EVELIN, cuyo apoyo moral nunca me faltó.

A un buen Amigo JAVIER

LUIS CARLOS GOMEZ NUÑEZ

TABLA DE CONTENIDO

	Pág
INTRODUCCION	
LA EXTRADICION	5.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA EXTRADICION	11
DELITOS QUE DAN LUGAR A EXTRADICION	12
EXTRADICION DE NACIONALES	15
PRINCIPIO "AUT DEDERE, AUT JUDICARE"	16
EXCEPCION A LA EXTRADICION POR DELITOS POLITICOS	18
EXTRADICION POR DELITOS MILITARES	20
ASPECTOS PROCESALES SOBRE EXTRADICION	
CLAUSULA DE EXCEPCION	21
EXTRADICION ENTRE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	24
CONCLUSION	
BIBLIOGRAFIA	

considerados como tales en legislación nacional, serán procesados y juzgados en Colombia". Y la formulación reserva sobre el particular el Art. 6 de la "convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas", suscritas en Viena el 20 de Diciembre de 1988, se ha planteado la hipótesis de que si es factible implantarla en Colombia mediante un decreto legislativo de conmutación interior; con la intervención del gobierno de distintos presidentes se llega a un juicio si tales medidas son convenientes para prevenir o eliminar el tráfico ilícito.

A partir del 7 de mayo de 1888 han estado vinculados Colombia y los Estados Unidos de América mediante la convención de extradición recíproca de delincuentes con la prohibición de la entrega de sus propios nacionales. Estos países se vinculan también mediante la convención interamericana de extradición, firmada en Montevideo el 26 de Diciembre de 1993, pero la cláusula opcional sobre extradición de los propios nacionales nunca fue suscrita por Colombia y los Estados Unidos de América. La tradición fue hasta entonces la no entrega de nacionales a otros estados por la vía de la extradición, con el compromiso, según el principio de Aut dedere Aut punire,

de enjuiciamiento de los colombianos que delinquen en el exterior.

Art. 9 del Código Penal de 1936 "La extradición se concederá u ofrecerá de acuerdo con los tratados públicos. En falta de tratados públicos, el gobierno ofrecerá o concederá la extradición conforme a los trámites establecidos en el Código de Procedimiento Penal y previo dictamen favorable de la Corte Suprema de Justicia en el segundo caso. No se concederá la extradición de colombianos ni la de delincuentes políticos-sociales", reiteró que "no se concederá la extradición de colombianos ni de delincuentes político-sociales". El Código Penal de 1980 reiteró que "en ningún caso Colombia ofrecerá la extradición de nacionales, ni considerará la de los sindicados o condenados por delitos políticos".

Sin embargo en la culminación de este trabajo pudimos enterarnos que el Gobierno cambiaba de idea en el Congreso y a lo cual el Ministro de Justicia Carlos Medellín, afirmó categóricamente cuando le preguntan que si la extradición es conveniente responde "si, diez veces si": también explicó a que se refirió el Presidente Ernesto Samper cuando propuso la creación de

LA EXTRADICION

* DEFINICION

Es el procedimiento que rige la Entrega de un individuo por parte de un determinado Estado, por la comisión de diversos delitos, que son reclamados por Gobiernos extranjeros para su juzgamiento en el respectivo país.

Según Manzini, (2) "El Instituto de la Extradición es aquel particular ordenamiento político jurídico según el cual un Estado provee a la entrega de un individuo, imputado o condenado, que se encuentra en su territorio, a otro Estado que quiere proceder penalmente contra el individuo mismo o someterlo a la ejecución de una condena penal ya irrevocablemente pronunciada".

el acto formal y solemne mediante el cual un Estado hace entrega a otro Estado de una persona refugiada en

(2) MANZINI, Vincenzo. Tratado de Derecho Penal, Trad de Santiago Sentis Melendo, Buenos Aires, Ediar S.A. Editores, 1948, Pág 78

castigarlos por los delitos cometidos fuera de su territorio. Es decir, si no conceden la extradición, la única alternativa es el enjuiciamiento y castigo por el Estado en cuyo territorio se encuentra el presunto delincuente para que el delito no quede impune, según el principio universal de aut dedere aut judicare, incluido actualmente en casi todos los tratados de extradición.

Pero, en cambio, otros Estados, encabezados por la Gran Bretaña, no aceptan ese principio y, en consecuencia, no hacen distinción entre súbditos nacionales y extranjeros para extraditar, con base en tratados o leyes internas, a personas acusadas de haber cometido en el extranjero delitos.

El citado tratado de paz de Amiens, de 1802, entre Francia, Gran Bretaña, España y Batavia, incluye la extradición de delincuentes comunes, pero excluye a los perseguidos políticos.

A fines del siglo XX, los Estados Unidos de América reviven la extradición medieval para asegurarse la entrega de sus enemigos políticos extranjeros y nacionales, como en los casos de espionaje, conspiración y narcotráfico, "en nombre de la seguridad nacional".

Por ello imponen tratados bilaterales de extradición, como el de 1979, con Colombia, o colectivos, como el Art. 60 de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas de 1988.

* FUENTES

La extradición se regula por normas de derecho internacional público, derecho internacional privado, derecho penal, derecho procesal penal, derecho administrativo, derecho constitucional y derecho civil.

En cuanto a las fuentes, hay que distinguir entre fuentes internas y fuentes internacionales. Las fuentes internas regulan aspectos procesales y sustanciales de la extradición. Según las distintas legislaciones hay varios sistemas:

A. Ley especial sobre extradición.

B. Regulación de la extradición en el Código de Procedimiento Penal.

C. Norma sobre reglamentación de extranjería, en la que se analiza la extradición.

Reglamentación de la extradición Código
Penal conjuntamente el Código de Procedimiento
Penal.

Respecto las fuentes internacionales hay que
distinguir:

- A. Convenciones bilaterales.
  - B. Convenciones multilaterales
- Reciprocidad internacional.

En los sistemas del common law se regulan solo los
aspectos procesales en leyes internas, ya que la
obligación de extraditar es internacional y deriva solo
de tratados públicos o de la reciprocidad
internacional.

La reciprocidad puede ser de hecho, diplomática o legal.

En cuanto a la forma como la reciprocidad se manifiesta,
puede ser medio de declaraciones unilaterales o
bilaterales emitidas por el órgano responsable de las
relaciones internacionales. Relativamente las
autoridades declaran o comprueban u ofrecen la
reciprocidad, ellas pueden ser políticas o judiciales.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA EXTRADICION

Como principios fundamentales de la extradición se tienen los siguientes:

A. Competencia del Estado requirente. El criterio procura que se aplique la extradición a hechos cometidos en el ámbito territorial del Estado requirente. Se exceptúan los delitos cometidos en territorio del Estado requerido y se excluyen los casos en que hay competencia de este.

B. Doble punibilidad. En términos generales, no se concede la extradición por hechos no previstos como delitos en la ley del Estado requerido.

C. Subsistencia de la pretensión punitiva. Esto exige que no se haya extinguido la acción por prescripción, amnistía, indulto, y que no exista cosa juzgada.

D. Entidad mínima del delito. Consiste en que no se concede extradición por delitos menores o contravenciones.

E. Carácter común del delito. No se concede la extradición por delitos políticos y conexos y militares.

F. Debido proceso legal. La doctrina acepta no conceder la extradición de quienes hayan sido juzgados en rebeldía, o por tribunales honor.

G. Fundamentación. La solicitud de extradición debe acompañarse de los documentos exigidos para cada caso.

H. Extraditabilidad de las personas. Se deben tener en cuenta los convenios internacionales y la legislación interna para determinar cuáles personas son extraditables.

En este capítulo explicaremos cada uno de estos principios y las doctrinas existentes al respecto. Sin embargo, es bueno advertir que la extradición es diferente de la denominada "transferencia", que consiste en la entrega de un condenado al Estado de su nacionalidad para hacerle cumplir la penalidad impuesta. Esta materia actualmente se está regulando mediante convenios bilaterales y multilaterales inspirados en la filosofía consiste en que es mejor la readaptación en el medio familiar del condenado que en un país extranjero.

DELITOS QUE DAN LUGAR A EXTRADICION

La obligación de extraditar se establece en forma clara

7. En los tratados bilaterales y multilaterales. En un estudio comparativo del Proyecto Convención Interamericana sobre Extradición del OEA se explica así la evolución del principio de obligación de extraditar:

"En el derecho internacional clásico nunca se puso en duda la eficacia de la extradición pero sí se objetó por una corriente respetable de tratadistas que la extradición fuera una obligación en el sentido jurídico internacional. De allí proviene el principio grociano *aut dedere aut punire*, referido atrás, que incluso algunos autores como Quintano Ripollés no comparten, señalando que el «Estado requerido no es tan libre, como pensaba Grocio, de elegir entre castigar o entregar o no entregar; más bien lo es, en la realidad positiva actual, de entregar o no entregar, puesto que, sujeto a sus propias normas preestablecidas y obligatorias en lo interno, puede en múltiples ocasiones castigar *extradicturus* no hallándose el delito de que se le acusa dentro de su esfera de competencia, sea en razón de *atipicidad* la más frecuente *forum delicti commissi*. La tendencia actual respalda la tesis de que, en base al derecho internacional general, el Estado requerido no tiene obligación de conceder la extradición

a menos que el caso se contemple en un tratado bilateral o multilateral u, obviamente, en su propia legislación interna>>".

Lo anterior pone de manifiesto como, a la luz de la doctrina internacional vigente, el Estado requerido no está en libertad de escoger entre castigar o entregar, sino que puede optar por entregar o no entregar.

Respecto a los delitos, algunos convenios bilaterales adoptan el criterio de la duración de la condena para determinar si debe o no concederse la extradición por un delito específico.

La mayoría de los tratados en que son parte los Estados Unidos establecen como delitos que ameritan extradición los compilados en una lista que, o bien se anexa, o ya se incorpora en un artículo del tratado y que son punibles de acuerdo con las leyes de ambas partes. Algunos de los tratados estipulan, además, que los delitos darán lugar a la extradición, aunque no estén incluidos en la lista, si son punibles de conformidad con el derecho federal de los Estados Unidos y el derecho de otra parte.

Los tratados también establecen que será indiferente el que las leyes de las partes contratantes clasifiquen o no al delito en una misma categoría o usen una misma o distinta terminología para designarlo.

En ciertos tratados bilaterales se requiere que el delito punible de acuerdo con las leyes de ambos Estados mediante pena privativa de la libertad por plazo superior a un año. En otros se exige que el delito sea sancionable con pena de prisión de dos años o más de acuerdo con las leyes del Estado requerido.

EXTRADICION DE NACIONALES

Diversos tratados establecen que las partes no estarán obligadas a extraditar sus propios nacionales. En otros convenios la autoridad competente del Estado requerido "podrá entregarlos si lo considera conveniente". Otros convenios hay en que se incluye una cláusula especial: "condición de que no lo prohíba la ley del Estado requerido".

En un estudio de la OEA, luego de analizarse los distintos tratados bilaterales y multilaterales, se expresa: "En general se concluiría que, actualmente, el

Estado requerido tiene jurisdicción para enjuiciar el delito debe someter el caso a las autoridades judiciales competentes "para perseguir el delito" o "con el objeto de iniciar la investigación o para adelantar el respectivo proceso".

El tratado entre Estados Unidos y Alemania es el único que exige que de no concederse la extradición de un nacional, la parte requirente deberá presentar una solicitud antes de que el caso sea sometido a las autoridades competentes del Estado requerido para que ellas decidan respecto de si es o no apropiado encausar en virtud de sus leyes, luego de lo cual comunicará al Estado requirente el resultado de la solicitud. Además, se estipula que el Estado requirente someterá sin cambio documentos o pruebas adicionales que fueren necesarios. Disposiciones similares figuran en los tratados entre México y España y Argentina y Brasil.

En el tratado entre Uruguay e Italia figuran disposiciones relativas a la restitución de elementos de prueba al Estado requirente, y se fija para dicha restitución un plazo de 60 días a contar de la fecha en que se rehusó la extradición (art. 30).

tanto, si el Estado requerido niega la extradición por cualquier causa, debe juzgar a la persona respectiva. Este es, pues, el significado del principio aut dedere, aut judicare.

EXCEPCION A LA EXTRADICION POR DELITOS POLITICOS

Haciendo un parangón entre el delito común y el delito político, por su aspecto subjetivo, se ha dicho que en el primero el agente realiza el hecho casi siempre por motivos innobles o bajo el influjo de pasiones desbordadas, con perversidad, o con fines de venganza. Por el contrario, en el segundo, los móviles son casi siempre políticos o de interés común; la aspiración a lograr un replanteamiento de las condiciones económicas, políticas y sociales de una colectividad son por regla general - los factores determinantes de esta clase de delinquentes.

"El delito político tiene un objeto final invariable que le es consubstancial, se prospecta buscando una repercusión efectiva y se realiza con supuesta justificación social y política."

"Si estas son las notas características de este tipo de

delito, cabe precisar:

"1. Que envuelve siempre un ataque a organización política e institucional del Estado.

Que se ejecuta buscando el máximo de trascendencia social y de impacto político.

Que se efectúa en nombre y representación real o aparente de un grupo social o político.

"4. Que se inspira en principios filosóficos, políticos sociales determinables.

Que se comete con fines reales o presuntos de reivindicación socio-política.

"A simple vista el delito político tiene un objetivo jurídico concreto el cual recae o va dirigida su acción: El Estado como persona política o como institución jurídica.

"Con idéntica claridad el delito político tiene un modo especial de ejecución o modo de ser, ajeno a su peculiar tipicidad, pero en estrecha conexión con ella: la repercusión, la representación, la inspiración y la

motivación siempre lo acompañan con absoluta fidelidad. Rasgos que se plasman en buscar el ámbito de su mayor difusión, en obrar a nombre de un segmento social o político y en hacerlo bajo la égida de una dialéctica de masas lograr una concreta reivindicación socio-política.

EXTRADICION POR DELITOS MILITARES

Quedan asimismo excluidos de los tratados de extradición los delitos militares. Tal exclusión fue formulada por el Instituto de Derecho Internacional en la sesión de Oxford, celebrada en 1890. "La extradición declara no debe aplicarse a la deserción de los militares pertenecientes a los ejércitos de tierra o de la marina, o a los delitos puramente militares". *Artículo 7*

ASPECTOS PROCESALES SOBRE EXTRADICION

La transmisión de la solicitud puede ser formulada de gobierno a gobierno, según el procedimiento que uno y otro convengan. La mayoría de tratados establecen la vía diplomática.

"La solicitud de extradición será formulada por el

medidas rigurosas, si es que así lo considera oportuno el gobierno colombiano, tendrá que estar ceñida a los cánones constitucionales".^x

La Corte Constitucional, mediante su sentencia C-466/95, 18 de Octubre de 1995, declaró inexecutable esa conmoción interior. Según la Corte, el decreto 1370 de 1995 "resulta violatorio no sólo del artículo 213 de la Constitución, sino de las normas de la Ley 137 de 1994, estatutaria de los estados de excepción en las partes que desarrollan tal precepto, a saber: artículos 33 y 34, y en especial el artículo 2o. que dispone que las facultades atribuidas al gobierno durante los estados de excepción "sólo podrán ser utilizadas cuando circunstancias extraordinarias hagan imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios del Estado".^x

Dijo la Corte Constitucional, asimismo, que el Decreto de la conmoción interior violó el Art. 4o. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, que sólo permite "adoptar medidas de excepción ante situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación, esto es, que superen el límite de normalidad causando grave crisis en la vida

sus garantías penales. Establecidas en el Código Penal y Código de Procedimiento Penal Colombiano.

La Ley 27 de 1980 fue declarada inexecutable por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de 1^o de Diciembre de 1986, ley reemplazada por la Ley 68 de 1986, declarada también inexecutable por sentencia de junio 25 de 1987.

A pesar de que el Gobierno de los Estados Unidos de América no se opuso a dichas sentencias, que dejaron sin vigencia el tratado bilateral de 1979, el Gobierno colombiano hizo esfuerzos encaminados a reactivar la entrega de nacionales a los Estados Unidos de América, bien mediante la invocación del Tratado de Montevideo, de 1933, o bien mediante medidas de estado de sitio.

El tratado bilateral de 1979, no obstante que no puede ser aplicado por su inconstitucionalidad, no ha desaparecido del campo jurídico y se le sigue utilizando como medio de presión contra Colombia, en concreto por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, que sigue sosteniendo que el tratado está vigente. Ninguno de los gobiernos de los Presidentes Virgilio Barco Vargas, César Gaviria Trujillo y Ernesto

Samper Pizano se atrevieron a denunciarlo, conforme a lo dispuesto en el numeral 4o. del Art. 21 del Tratado de Extradición suscrito entre Colombia y Estados Unidos en

"Cada una de las Partes contratantes podrá dar por terminado este Tratado en cualquier momento, previa comunicación a la otra Parte contratante y la terminación tendrá efecto seis meses después de la fecha de recepción de dicha comunicación".

El tratado, obviamente, no tiene aplicación alguna, pese a que tanto el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, como el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, han dicho, desacatando los fallos de Corte Suprema de Justicia que son cosa juzgada constitucional de obligatorio cumplimiento, que el tratado está vigente.

Con el nacimiento la Constitución Política de Colombia, de 1991 en su Art. 35. Prohibió la extradición de colombianos por nacimiento, enterrando definitivamente el tratado bilateral firmado con los Estados Unidos de América en 1979.

Sin embargo, el tratado de 1979 está siendo utilizado por el Gobierno de los Estados Unidos. como instrumento

de presión para que Colombia modifique el Art. 35 de la Constitución Política y pueda restablecer la extradición de colombianos por nacimiento. Esto parece un capítulo cerrado de la historia de Colombia, a no ser que se pretendiere revivir una sangrienta guerra, como la que estalló el 30 de Abril de 1984, cuando el gobierno del presidente Belisario Betancur, tras la muerte de su ministro de justicia, Rodrigo Lara Bonilla, declaró la guerra a muerte contra el narcotráfico y el 14 de Noviembre puso en marcha la entrega de colombianos a los Estados Unidos de América.

Incluso como el Art. 35 de la Constitución Política prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento, algunas personas hablan del temor de que la Drugs Enforcement Administration (DEA). Y la Central Intelligence Agency (CIA) ,?lleven a cabo operaciones ilegales en Colombia con el pretexto de combatir el narcotráfico. Y pudieran intentar el secuestro de colombianos acusados por supuestos delitos de narcotráfico para sacarlos del país y llevarlos a los tribunales de los Estados Unidos de América.

De antemano, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha advertido que no toleraría en el territorio colombiano

CONCLUSION

La extradición de nacionales estuvo siempre regulada por los Códigos Penal y de Procedimiento Penal y por los tratados públicos. Nunca fue mencionada en la Constitución, ni su tratamiento inquieto a los juristas, ni a los orientados o forjadores de la opinión pública.

El auge del narcotráfico y la participación de colombianos en el negocio ilícito hacia los Estados Unidos y Europa convirtieron en tópico de controversia nacional un tema que antes se explicaba apenas en forma rápida en las facultades de Derecho.

El Presidente Turbay Ayala negoció con el Gobierno de los Estados Unidos el tratado que permitía en ciertos casos la extradición de colombianos requeridos por la comisión en el exterior de delitos de narcotráfico básicamente.

vigencia del tratado, el gobierno estadounidense comenzó a solicitar la extradición de nacionales durante el gobierno de Betancur. El Presidente de la República, se negó a extraditar nacionales colombianos, aduciendo razones ideológicas, a pesar de que en ese momento el tratado aparecía incorporado a la legislación colombiana.

Por un decreto de Estado de Sitio, el gobierno Barco restableció, por la vía administrativa, la extradición de nacionales. Pero una ola de atentados indiscriminados y selectivos otros, unida a secuestros múltiples de colombianos eminentes, colocaron en estado de tensión a toda la sociedad colombiana y a dudar frente al tema de la extradición de nacionales colombianos.

En nuestro concepto no sería necesaria la extradición si el Estado Colombiano pudiera garantizar el castigo de los delitos en el extranjero de sus nacionales con penas ejemplarizantes que permitiera castigar con la severidad que conlleva el daño social de hechos delictivos como el narcotráfico. Y más aún cuando la extradición pudiera darse sólo por el intervencionismo de otro Estado o establecerla por amenazas al interior del legislativo colombiano.

Cuando el estado Colombiano tome la decisión o no de extraditar a sus nacionales debe hacerlo conciente de que esta respetando su propia soberanía y además está interpretando el sentir del pueblo Colombiano que fue el que eligio el Presidente y los Congresistas que en definitiva son quienes rigen el destino de la nación.

Las personas ya sean extranjeras o nacionales no deben prevalecer sobre el derecho, por que en el derecho no se es justo cuando se aplica con temor sino cuando se hace con verticalidad, honestidad y justicia.